

PERIODO
PRESIDENCIAL
002544
ARCHIVO

Análisis Político

INFORME DE ANALISIS

(AL 31 DE MAYO DE 1991)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A. ANALISIS POLITICO

Un dato fundamental para entender el cuadro político actual es que el gobierno, a más de un año de iniciada su gestión, cuenta con un vasto respaldo popular, según lo atestiguan todas las encuestas de opinión.

Una comprensión cabal de la situación política exige, sin embargo, ir más allá de esta primera constatación. El desarrollo político de las últimas semanas está poniendo en evidencia un fenómeno no perceptible por las encuestas que viene a introducir un grado mayor de complejidad en el tema "apoyo al gobierno".

A partir de una serie de declaraciones públicas, actos partidarios y demandas sociales, se ha empezado a manifestar lo que podríamos denominar un **creciente malestar político y social en sectores de la Concertación**. Ese descontento se concentra en la militancia más activa de los partidos de la Concertación y en los sectores sindicales afines al gobierno.

Este malestar amenaza, hoy por hoy, con adquirir una mayor significación política como resultado de la creciente confluencia entre dos fenómenos que se habían insinuado o manifestado hasta el momento en forma aislada: por un lado, el desencanto que se expresa entre integrantes de la coalición gobernante respecto de la política social del gobierno y, por otro, las críticas que se formulan a los planes modernizadores del Ejecutivo en relación a Codelco, EFE, y las empresas estatales de propiedad de Corfo.

En ambos casos, la sensibilidad social "progresista" de los miembros de la Concertación se veía frustrada ante el curso que toman los acontecimientos. Las críticas se basan en la supuesta constatación de que, en ambos planos, los elementos continuistas estarían primando por sobre los cambios requeridos.

Si esta conjunción se produce y la polémica se globaliza, lo que no es deseable, resulta indispensable que el gobierno enfrente el debate desde un terreno propositivo y creativo y no sobre la base de responder defensivamente a los argumentos que puedan provenir tanto desde la derecha como desde el mundo social-sindical-partidario de la Concertación.

En relación a los problemas descritos cabe hacer algunas puntualizaciones:

1. Política Social del Gobierno

En cuanto a las supuestas insuficiencias de los logros sociales del Gobierno a que han aludido incluso presidentes de partidos de la Concertación, cabe señalar que sobre la materia impera una **inexplicable ignorancia respecto de los avances alcanzados durante la actual administración**. En este sentido, el Gobierno se encuentra inmerso en la paradójica situación de tener que dar excusas "por lo poco" (que se ha hecho) en circunstancias de que tal como se expresara en el Mensaje del 21 de Mayo, los logros en materia económico-social son significativos.

Para lograr una efectiva adecuación entre lo que el Gobierno hace, y lo que la gente percibe que hace, es necesario superar dos dificultades.

La primera, de carácter endógeno, es la relativa incapacidad del gobierno para informar a su propia base de apoyo de la verdadera dimensión y alcance de sus logros sociales.

La carencia a este respecto no dice relación con la política de comunicación del Gobierno, la que por definición va dirigida a la opinión pública, sino de información, específicamente dirigida a nuestra propia base de apoyo político y social, tarea, por lo demás, en la que cabe un rol activo a los propios partidos de la Concertación.

La segunda, exógena, está constituida por la evidente arremetida de la derecha opositora destinada a "probar" el fracaso de las políticas sociales del gobierno. Esto se ha manifestado en declaraciones que aluden a una supuesta disminución del gasto social del año 1990 en relación al año anterior, y a un "aumento" del número de pobres.

Para un gobierno cuya definición programática esencial es "crecimiento con equidad", resulta preocupante que a nivel de la opinión pública se imponga la percepción de que la actual administración es ineficiente en materia social. Más grave aún, es que tal sensación cunda entre los partidarios del gobierno.

La solución de este problema supone, entre otras cosas, las siguientes:

- a. Generar una vocería social del más alto nivel. Dicha función debería ser asumida de un modo permanente por un Ministro de Estado, o algún funcionario público, que explique, justifique y defienda públicamente las políticas sociales del gobierno. Así, por ejemplo, el régimen anterior, pese a todas sus carencias a nivel social, tenía, por ejemplo, una Patricia Matte, que estaba permanentemente informando, difundiendo y potenciando los logros en ese nivel, por insuficientes que fueran.
- b. Perfeccionar los canales de información que van desde los ministerios hacia las reparticiones e instancias regionales, provinciales y comunales, incluidos los partidos y organizaciones sociales proclives a la Concertación.
- c. Sin perjuicio de lo anterior, es indispensable que los partidos políticos de la Concertación asuman un rol más activo, y un verdadero liderazgo o conducción, en la defensa de la política social del gobierno.

2. La Modernización del Estado

El gobierno ha decidido impulsar un conjunto de iniciativas legales que apuntan, por una parte a modernizar y fortalecer algunas empresas del Estado sobre la base de abrir la posibilidad de asociación con el sector privado y, por la otra, a racionalizar la manera en que opera Corfo.

Los proyectos referidos responden todos a una misma lógica y se inscriben dentro del marco de una política de desarrollo y modernización.

La doble perspectiva.

Los problemas que a este respecto han surgido con nuestra propia base de apoyo dicen relación con la coexistencia dentro de la Concertación de dos tipos de actitudes respecto de las políticas gubernativas sobre la materia. Por un lado, están los que creen que las políticas modernizadoras en

cuestión deben ser aplicadas como un "mal menor", ante el conjunto de restricciones existentes y dada la inexistencia de alternativas más viables. Por otro lado, están los que creen en las bondades intrínsecas de las medidas que se adoptan. En suma, respecto de las iniciativas en comento, conviven dentro del bloque oficialista quienes se sienten obligados, y quienes se sienten suficientemente persuadidos de las bondades de las mismas.

Tal situación no sólo dificulta la presentación, descripción y justificación de las políticas modernizadoras, sino que supone un riesgo adicional respecto de la cohesión de los partidarios de la Concertación. En efecto, si prevalecen las voces de aquellos que aceptan las medidas sólo como un mal menor, y perciben éstos que los costos políticos y sociales que el gobierno debe asumir al llevarlas a cabo es muy significativo, aumentarán las posibilidades de voces disonantes, comportamientos alternativos y deserciones sobre la materia.

El mundo sindical como la principal base de apoyo social al Gobierno: el riesgo del conflicto.

Esto nos lleva a otro punto de fundamental importancia. El actual Gobierno ha estado, desde su génesis, claramente vinculado al mundo sindical. Este es un Gobierno que se ha identificado desde sus inicios con las demandas de los trabajadores. A nadie puede extrañar que un 75% del mundo sindical se identifica con los partidos políticos pertenecientes a la Concertación.

Este nítido perfil del Gobierno es un activo político que no puede arriesgarse. Si a la insatisfacción manifestada por los dirigentes sindicales respecto del resultado de las reformas laborales se agregan los conflictos sectoriales en las Empresas del Estado, derivadas del problema de las privatizaciones en Corfo, la negociación en Codelco, y la reestructuración de la Empresa de Ferrocarriles, puede concluirse que el Gobierno enfrenta, como nunca, serios riesgos de que se globalice la sensación de desencanto en el mundo sindical.

Fuera de los evidentes costos y riesgos políticos que esto conlleva, es preciso considerar que en un cuadro de alta conflictividad social aflorarán las discrepancias y "alternativismos" de parte de dirigentes políticos y parlamentarios de la Concertación que no estarán dispuestos a perder sin más su base de apoyo social.

Las percepciones del movimiento sindical ante la reestructuración de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y otras políticas modernizadoras del Estado.

- a. Los trabajadores de EFB, y de la CUT en particular, perciben que las propuestas del Gobierno respecto de privatizaciones parciales o asociaciones con el capital privado han coincidido en el tiempo con la ofensiva pública de RN respecto de la privatización de 14 empresas públicas, lo que genera un doble temor. En el fondo, lo que se percibe es que el Gobierno estaría haciendo suyos los postulados ideológicos de la derecha sobre esta materia.
- b. Esta aprensión se ve ciertamente fortalecida en la medida en que el gobierno no ha sido capaz de emitir un mensaje claro respecto del verdadero sentido y alcance de sus políticas. Los trabajadores no perciben suficientes diferencias entre las privatizaciones de Pinochet y las iniciativas impulsadas por el actual Gobierno. La diferencia entre la "modernización autoritaria" y la "modernización democrática e integradora" no ha sido definida ni explicada a cabalidad, ni menos asimilada por el mundo sindical.

Muy por el contrario, los símbolos que imperan en la mente de los trabajadores de EFE son los de "privatización" y "1200 despidos", lo que, pese a no ajustarse estrictamente a la realidad, permite convocar a la solidaridad del resto del movimiento sindical.

- c. Por otro lado, la experiencia de privatizaciones anteriores aumenta las suspicacias del mundo sindical. Las empresas del Estado privatizadas durante el Gobierno anterior quedaron en manos de grupos económicos vinculados a personeros del régimen autoritario. Sus utilidades, más aún, aumentaron considerablemente. En consecuencia, las privatizaciones son entendidas como un perjuicio para el Estado y pingües negocios para quienes adquieran los activos pertenecientes al Fisco.
- d. Por último, la CUT observa cómo nadie sale en "defensa del patrimonio nacional amenazado". Ese rol, entiende la CUT, debe ser asumido por los trabajadores.
- e. Los trabajadores de EFE consideran que su capacidad de influir durante la tramitación del proyecto de ley en Valparaíso es muy limitada, más aún si se considera el apoyo oficial del PDC y del PS al proyecto del Ejecutivo. Es por eso que sus movilizaciones y acciones de protesta tendrán lugar en los momentos en que el proyecto de ley sea enviado a Valparaíso.

3. Los partidos de la Concertación

Durante el primer año de gobierno los partidos políticos integrantes de la Concertación prestaron al gobierno apoyo y colaboración decidida y leal.

Sin embargo, en las últimas semanas se han advertido síntomas de inquietud en el seno de los principales partidos de la coalición gobernista. En algún sentido, el fenómeno está condicionado por el incipiente comienzo de las primeras escaramuzas electorales con miras a las elecciones municipales.

Existen, empero, otras causas. Las críticas que, tímidamente, y a veces no tanto, empiezan a asomar, no responden únicamente a un posicionamiento electoral. Existen, tanto en el PDC como en el PS-PPD, motivos más profundos de insatisfacción. No se trata, en todo caso, de una conducta planificada de las directivas nacionales, sino más bien de una sensación a nivel de las bases partidarias.

En el caso de la DC, el tema de las críticas al gobierno adquiere importancia en momentos en que dicho partido se prepara a elegir democráticamente nuevas autoridades superiores.

Las críticas se refieren principalmente a los siguientes puntos:

1. La supuesta falta de una impronta más característicamente democratacristiana en el gobierno. Cabe señalar que esta cuestión puede tener que ver tanto con las expectativas que al respecto se pudieron haber creado entre los militantes DC a comienzos de este gobierno, como con la falta de una "cultura concertacionista" y, sobre todo, de una "cultura de gobierno" dentro del partido.

2. La supuesta falta de una adecuada política comunicacional del gobierno.
3. La supuesta postergación y subordinación de los intereses de la militancia DC en beneficio de otros partidos de la Concertación, los cuales estarían "ganando terreno" a costa del PDC. Cabe resaltar que la misma queja se escucha en los demás partidos respecto a una supuesta hegemonía DC.
4. La presión que comienzan a ejercer las poderosas bases sindicales del PDC sobre la estructura del partido a efectos que éste asuma un rol de defensa y vocería de los intereses y derechos de los trabajadores frente a aquellas medidas que pudieran "afectar" dichos intereses.

En el caso del PS-PPD, junto con compartir algunas de las críticas anteriores, se añaden otras tales como el supuesto "inmovilismo" que existiría tanto en materia político-institucional como económico-social, y temas puntuales que tocan a su propia base de apoyo, tales como la situación de los presos políticos y la percepción de que tampoco se avanza significativamente a este respecto.

Como puede advertirse los elementos son de diversa naturaleza y entidad. No cabe, por tanto, tratarlos como una sola unidad.

Aunque lo anterior está aún muy lejos de significar un distanciamiento con el Gobierno, esta creciente confluencia entre la "sensibilidad social" de los partidos y parlamentarios de la Concertación y la "cultura estatal" presente en sectores como Codelco, EFE y Corfo, entre otros, no debe hacernos perder de vista que:

1. El gobierno cuenta con un gran respaldo popular.
2. Muchas veces este respaldo popular entra en conflicto con intereses sectoriales y es la capacidad del gobierno para "resistir presiones" lo que le significa ganar un importante grado de apoyo a nivel de opinión pública.
3. Existe una natural inclinación, lo que es comprensible por lo demás, a que dirigentes partidarios y parlamentarios de la Concertación actúen como voceros de legítimas demandas sectoriales y regionales, lo que muchas veces los aleja de la necesaria "lógica de Estado" que debe imperar dentro de la actual coalición gobernante.
4. La política de "modernización del Estado" y de "asociación" con el sector privado, pese a las dificultades en distinguirlas de la de "privatización" impulsada por el régimen anterior, aparece, hoy por hoy, como la única viable, sin perjuicio de los naturales ajustes que puedan introducirse en su implementación, y de la necesidad de contar con una adecuada política comunicacional para difundirla masivamente.

B. ANALISIS ECONOMICO

Durante la semana que termina, el principal tema de preocupación en el ámbito económico ha sido el de las proyecciones de inflación para el mes de Mayo.

En cuanto al IPC, parecen confirmarse las predicciones respecto de una especie de pacto implícito entre las autoridades de gobierno y dirigentes empresariales encaminado a bajar el perfil del impacto inflacionario del mes de Mayo, presentándolo como una cuestión meramente coyuntural.

Asimismo, existe confianza en que la economía tiene factores productivos disponibles para crecer durante el resto del año, de modo de alcanzar la tasa de 5% de expansión económica durante 1991, sin sobrepasar la tasa de 18% anual de inflación. En otras palabras, existiría todavía espacio para seguir creciendo y la economía chilena no se encuentra en peligro de un "sobrecalentamiento" y, por tanto, no aparece como necesario un nuevo ajuste macroeconómico.

Esta coincidencia en el diagnóstico es un factor que permite insistir en que el alza del IPC de Mayo es de carácter coyuntural y que esa tendencia alcista debería revertirse en los próximos meses.

Sin embargo, el gobierno deberá desplegar un importante esfuerzo para tranquilizar a la opinión pública cuando ésta se entere que el IPC experimentó un alza del 2,5% durante mayo. En este esfuerzo tranquilizador, que es fundamental no sólo desde el punto de vista político sino también económico dado el importante rol de las expectativas, sería conveniente aprovechar las expresiones del sector empresarial y obtener la cooperación de los parlamentarios de la Concertación. Esto último, que parece obvio, no lo es tanto, ya que han aparecido algunos brotes de descontento al interior de los partidos y siempre existe la tentación de capitalizar esos sentimientos.

Más allá de las argumentaciones macroeconómicas (la demanda está creciendo y la oferta también, pero todavía lentamente), es conveniente saber qué productos están impactando más fuertemente en esta alza.

Más de la mitad del alza del IPC de Mayo fue causada por el rubro alimentos. Este rubro, que representa alrededor de un tercio de la canasta, experimentó durante Abril un alza aproximada de 4%. Al interior del rubro alimentos, los grupos de mayor alza fueron los de carnes y productos vinculados con la harina.

Los pronósticos de 2,3% vigentes hasta la semana pasada fueron superados a causa de una significativa alza en el pan corriente en los últimos días. Este solo producto, podría estar apostando entre 0,2 y 0,3 puntos en el 2,5% del mes.

El hecho de que el rubro Alimentos y especialmente el pan, haya experimentado un alza tan significativa, induce una preocupación adicional, que es el hecho de que los sectores más pobres, en cuya canasta los alimentos tienen mayor proporción, experimentaron durante Mayo una pérdida de poder adquisitivo seguramente muy superior al 3%. Es indudable que la prensa opositora le dará amplia cobertura al "IPC de los pobres" que se calcula mensualmente, pero que durante los últimos meses pasó inadvertido porque subió menos que el IPC general.

El rubro Vivienda aporta alrededor de 0,6 puntos en la variación (casi un cuarto de la variación total). Los principales aportes provienen de los ítemes Arriendo (0,3 puntos) y Contribuciones (0,2). La verdad es que el alza registrada este mes en ambos productos no corresponde sólo a alzas ocurridas durante Mayo. El ítem Arriendo se calcula cada tres meses, pero en esta ocasión, a causa de un perfeccionamiento en el calendario de encuestas, es la primera encuesta del año, por lo cual, el alza del canon de arriendo (8,7%) cubre el período Diciembre-Mayo. Si bien es cierto este elemento eleva artificialmente el IPC de Mayo en alrededor 0,1, esa alza debió reflejarse en Marzo o Abril y sólo fue postergada un par de meses, por lo que no hay un efecto sobre el IPC acumulado.

El ítem Contribuciones, presenta un alza de 14,5%, que corresponde al alza semestral. Nuevamente, se trata de una inflación postergada, que cayó en Mayo, como ocurre todos los años.

El rubro Vestuario aporta 0,4 puntos y los rubros Transporte, Comunicaciones y otros, prácticamente no agregan incidencia al IPC del mes.

Es indudable que en el alza del rubro Alimentos, hay un significativo elemento estacional, especialmente en lo relativo a las carnes (no ocurre lo mismo con frutas y verduras frescas, cuya alza estacional vendrá en los próximos meses, sin olvidar el factor disuasivo de la demanda que constituye la amenaza del cólera). Sin embargo, no debe despreciarse el efecto que sobre estos rubros tiene el alza en los ingresos reales de los hogares. En todo caso, este efecto no tiene por qué ser permanente y la misma inflación tiende a reducir los ingresos reales hasta que dejen de ejercer una presión excesiva sobre el mercado.

Con el 2,5% de Mayo el IPC acumulado durante 1991, alcanza a 6,2% y la variación acumulada en los últimos 12 meses llega a 24,3%. De acuerdo a esto, para alcanzar una variación de 18% durante 1991, se requiere que el IPC promedio no supere una variación mensual de 1,52% en lo que resta del año.

Aunque el tema de la inflación y el manejo macroeconómico de corto plazo marcarán la pauta de la discusión económica durante la próxima semana, el tema de las privatizaciones no se disipará fácilmente.